



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

53130003/2013

Córdoba, 25 de julio de 2025.

Y VISTO:

Los presentes autos caratulados: **"GIROLAMI, NÉSTOR ALBERTO s/INFRACCION LEY 24.769" (FCB: 53130003/2013/TO01)**, llegados a despacho a fin de resolver la situación procesal de Néstor Alberto Girolami.

Y CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES

Etapa de instrucción

Con fecha 7 de febrero de 2013, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente Agencia de Recaudación y control Aduanero (ARCA), formuló denuncia penal contra los directivos y/o responsables de la firma "Majul Maquinarias S.R.L." por la presunta comisión del delito de evasión simple, en relación con el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 2006 y 2007, por las sumas de \$858.557,17 y \$822.821,30 respectivamente, y con relación al Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos 2006 y 2007, por los montos de \$1.994.067,74 y \$203.278,67 respectivamente (fs. 3/19).

Con fecha 22 de marzo de 2013, el Sr. Juez Federal, Dr. Carlos Arturo Ochoa, previa vista al representante del Ministerio Público Fiscal, citó al Sr. Néstor Alberto Girolami a prestar declaración indagatoria para el día 4 de abril de 2013 y, en la misma resolución, declaró extinta la acción penal por prescripción respecto del delito de evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2006, disponiendo en consecuencia su sobreseimiento, y lo sobreseyó asimismo en relación con la evasión simple del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2007, en virtud de la modificación introducida por la Ley N° 26.735 (fs 35/37).

Con fecha 11 de abril de 2013 presta declaración indagatoria el Sr. Néstor Alberto Girolami, quien negó la comisión de los hechos y se abstuvo a declarar (fs. 41). El 24 de abril de 2014 se dicta auto de procesamiento (fs. 70/72), el cual es apelado y posteriormente desistido tácitamente. Con fecha 07/10/2015 el Sr. Fiscal Federal, Dr. Guillermo Rodolfo Lega, requiere la elevación de la causa a juicio atribuyéndole al encartado el siguiente hecho: *"Haber evadido total o parcialmente, en su carácter de gerente de la contribuyente "MAJUL QUINARIAS SRL." CUIT N° 33-70816980-9, cuya actividad principal*



autodeclarada es la de "Venta al por Menor de Máquinas y Motores y sus repuestos" 523992) y en las actividades secundarias "Cultivo de Soja" (CHIU 11131); venta al por Mayor en Comisión o Consignación de Cereales" (CIU 511111) y venta al por Mayor de Cereales" (CITU 512111), el Impuesto Al Valor Agregado -periodo fiscal 2007- por la suma de pesos ochocientos veintidós mil ochocientos veintiuno con treinta centavos (\$ 822.821,30) e Impuesto a las Ganancias - periodo fiscal 2006 - por la suma de pesos un millón novecientos y cuatro mil sesenta y siete con setenta y cuatro centavos (\$ 1.994.067,74). Ello en razón para el Impuesto a las Ganancias período Fiscal 2006, no haber declarado ingresos gravados, no haber cumplido con los medios de pagos previstos en la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal (N° 25.455) y haber computado gastos improcedentes; y, para el Impuesto al Valor Agregado período Fiscal 2007, haber omitido declarar ingresos gravados, haber incumplido con los medios de pagos previstos en la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal (N° 25.455) y haber computado gastos improcedentes; ocultando con dicho proceder su real situación económica y patrimonial frente al Fisco Nacional: conducta que se encontraría contemplada prima facie, sin que ello implique adelantar criterio, en el art. 1° de la ley 24.769 a título de evasión simple, en carácter de autor penalmente responsable (Art. 45 del Código Penal).” El mismo fue calificado como delito de evasión simple del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2006, por la suma de \$1.994.067,74 en concurso real con el delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal 2007, cuyo perjuicio económico asciende a la suma de \$822.821,30 (art. 1 de la ley 24.769 modificada por la Ley 26.385). Finalmente, la causa es elevada en diciembre de 2015.

Etapas de juicio – Invocación de planes sin relación con la causa y la falta de información completa.

El día 18 de diciembre de 2015 se cita a juicio a las partes. Con fecha 12 de agosto de 2016 se provee la prueba y se fija fecha de audiencia oral de debate para el día 08/09/2016.

Con fecha 25/08/2016 el Sr. Girolami solicitó que se suspenda la audiencia en virtud de la sanción de la ley 27.260 y para poder gozar de sus beneficios, lo cual fue concedido previa vista al fiscal, fijándose como nueva fecha de audiencia el 2 de noviembre de 2016.

Con fecha 1 de noviembre de 2016, el Dr. José Pablo Mosquera, en representación de su defendido Néstor Alberto Girolami, solicitó la suspensión de la audiencia de debate prevista, invocando la adhesión de su asistido al régimen de regularización fiscal establecido





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

por la Ley N° 27.260, conforme la documentación acompañada. De dicha constancia surge que el Sr. Girolami consolidó su deuda el día 26 de octubre de 2016 mediante el plan N° I836297, por obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, por un monto total de \$333.311, a cancelar en 61 cuotas con una tasa de interés del 1,5%. En dicha oportunidad **no se acompañó el detalle de las obligaciones incluidas en el plan, ni constancia alguna que permita verificar que las mismas guardaban relación con los hechos objeto de esta causa.**

Ante la falta de precisión en la documentación aportada, y con fecha 29 de agosto de 2017, el Sr. Fiscal General solicitó que se oficie a la AFIP a fin de requerir copia del plan invocado y verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el acogimiento a la Ley N° 27.260. El 27 de febrero de 2018, la AFIP (ahora ARCA) informó que tanto MAJUL MAQUINARIAS AGRÍCOLAS SRL como el Sr. Girolami se habrían adherido a un plan de facilidades —sin especificar las obligaciones comprendidas—, pero no se acompañó el Formulario N° 408, e informó que existían cuotas impagas. Ante esta situación, el Sr. Girolami fue formalmente intimado a subsanar dichas falencias.

Con fecha 21 de marzo de 2018 el Dr. Mosquera presenta documentación que revela que el Sr. Girolami estaba al día con las cuotas del plan y manifiesta que se habría extraviado la copia del formulario requerido. Conferida vista al Ministerio Público Fiscal, se emplazó con fecha 11 de abril de 2018 al Sr. Girolami a que presente copia del formulario 408.

Con fecha 9 de diciembre de 2020 se integró de manera unipersonal el Tribunal, y el 15 de diciembre del mismo año, previo sorteo, fue desinsaculada la Sra. Jueza de Cámara Dra. María Noel Costa para intervenir en la causa, lo cual fue debidamente notificado a las partes. Cabe señalar que tales actuaciones tuvieron lugar en el contexto del brote pandémico de coronavirus (COVID-19), con restricciones sanitarias vigentes y funcionamiento reducido de los organismos judiciales y administrativos.

Posteriormente, con fecha 5 de febrero de 2021, el Sr. Fiscal General solicitó que se oficie a la AFIP a fin de que informe la situación del plan de pagos invocado por la defensa y acompañe el formulario 408 correspondiente. Con fecha 01 de marzo de 2021 el Dr. Mosquera presenta formulario 408 suscripto con acta notarial de fecha 23 de febrero de 2021, sin acreditar la presentación del mismo a AFIP (ahora ARCA).

En virtud de lo reseñado y las confusas presentaciones del Dr. Mosquera se oficia a AFIP (ahora ARCA) quien con fecha 05/04/2021 contesta informando que no registraba a esa fecha acogimiento a Regímenes de Facilidades de Pago alguno.



Posteriormente el Dr. Mosquera renuncia, ante lo cual se lo notifica a Girolami y se lo intima a que designe nuevo abogado defensor, quien designa, tiempo después, al Dr. Delsoglio.

Con fecha 29 de agosto de 2024, el Ministerio Público Fiscal informó que la defensa del Sr. Néstor Alberto Girolami comunicó telefónicamente que su asistido se habría acogido al régimen de regularización previsto por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la Ley N° 27.743, desistiendo a la realización de cualquier medida alternativa, lo que motivo que el MPF solicitara al Tribunal un nuevo oficio a la AFIP (ahora ARCA) a los fines de que informe dicha circunstancia. En el mes de septiembre de 2024, respondió el oficio oportunamente requerido, informando que el Sr. Néstor Alberto Girolami no registraba acogimiento al régimen de regularización previsto por la Ley N° 27.743, lo que fue puesto en conocimiento del Sr. Fiscal.

En virtud de ello, con fecha 13 de febrero de 2025, el Sr. Auxiliar Fiscal solicitó la remisión de un nuevo requerimiento al organismo a fin de confirmar dicha circunstancia y, en caso de resultar negativa la respuesta, se fijara audiencia de debate. Oficiada la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), esta respondió únicamente en relación al Sr. Girolami, sin pronunciarse respecto de la firma Majul Maquinarias Agrícolas S.R.L., motivo por el cual se remitió nuevo oficio complementario. Con fecha 30 de mayo de 2025, ARCA informó claramente que, a la fecha, la totalidad de la pretensión fiscal denunciada permanece impaga. Asimismo, señaló que el contribuyente adhirió en primer lugar al plan N° I836297, en el marco de la Ley N° 27.260 y que ese plan incluyó impuestos y conceptos sin vinculación con los hechos investigados, y que fue declarado caduco por falta de pago con fecha 18 de abril de 2019. Informó también que, el 31 de marzo de 2022, se adhirió al plan N° Q053856 bajo el régimen de la Ley N° 27.653, en el cual se incluyó la totalidad de la pretensión fiscal denunciada (IVA períodos 2006 y 2007, e Impuesto a las Ganancias períodos 2006 y 2007), el cual también caducó el 18 de julio de 2022 por incumplimiento en los pagos comprometidos.

Del análisis de todo lo reseñado se desprende que, desde la primera solicitud de suspensión fundada en la adhesión a la Ley N° 27.260, el imputado Néstor Alberto Girolami intentó ampararse en distintos regímenes de regularización fiscal cuyos planes no comprendían las obligaciones tributarias objeto de esta causa. La documentación presentada fue siempre parcial, sin permitir corroborar fehacientemente la inclusión de los períodos fiscales imputados. A ello se sumó la parcialidad en las respuestas administrativas brindadas





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

por ARCA (ex AFIP). Recién con la última respuesta oficial de mayo de 2025 pudo confirmarse que ninguna de las adhesiones anteriores incluyó las obligaciones fiscales aquí investigadas y que todas las regularizaciones invocadas se encuentran caducas por incumplimiento. En virtud de ello se confirió vista al Ministerio Público Fiscal el 04/07/2025.

II.- VISTA MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Con fecha 23 de julio 2025, el Dr. Carlos Gonella, Fiscal General actuando en representación del Ministerio Público Fiscal, contestando la vista otorgada, expresó que en 2016 y 2022 el imputado se acogió a dos planes de regularización pero que solo el plan del año 2022 incluía efectivamente las deudas motivo de la presente causa. Asimismo, remarcó que la situación recién pudo ser aclarada en virtud del informe de ARCA en junio de 2025, puesto que tanto el organismo recaudador como la defensa habrían proporcionado información parcial.

En virtud de ello señaló que el último acto interruptivo de la prescripción es la citación de las partes a juicio de fecha 18/12/2015, ya que si bien el acusado invocó haberse acogido al régimen de regularización de pagos (lo que supondría la suspensión del curso de la prescripción) lo cierto es que no se pudo constatar de manera fehaciente dicha causal de interrupción.

Finalmente concluyó mencionando que los hechos tienen un máximo en la escala penal de 6 años por lo que considera que la acción penal se encuentra prescripta.

III.- POSTURA DEL TRIBUNAL

Preliminarmente, corresponde señalar que, conforme surge del requerimiento fiscal de elevación a juicio, se atribuye al imputado la comisión del delito de evasión simple del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2006, por la suma de \$1.994.067,74, en concurso real con el delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2007, cuyo perjuicio económico ascendería a \$822.821,30, ambos previstos en el artículo 1° de la Ley 24.769, conforme su modificación por la Ley 26.735. La escala penal aplicable a tales figuras prevé una pena máxima de seis (6) años de prisión.

Modificación Ley 27.430

En primer término, corresponde pronunciarse sobre la aplicación del principio de ley penal más benigna, para luego abordar lo relativo a la prescripción de la acción penal. En ese sentido, debe destacarse que con fecha 29 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín



Oficial la Ley N° 27.430, que introdujo modificaciones sustanciales al régimen penal tributario, entre ellas la elevación del monto mínimo requerido para configurar los delitos previstos en el artículo 1° de la Ley 24.769, que pasó de \$400.000 a \$1.500.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual.

Dado que la reforma introducida por la Ley N° 27.430 resulta más favorable al imputado, corresponde su aplicación retroactiva en virtud del principio de la ley penal más benigna, conforme lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores. En particular, el Máximo Tribunal ha afirmado de forma categórica que dicho principio rige plenamente en el ámbito del derecho penal tributario, aun en los supuestos en que las modificaciones legislativas versen sobre montos cuantitativos considerados como condiciones objetivas de punibilidad, tal como fuera resuelto en la causa “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769” (CPE 601/2016/CS1).

Así las cosas, debiendo aplicarse la normativa más benigna para el imputado (art. 2 CP), entiendo que corresponde dictar el sobreseimiento del imputado Néstor Alberto GIROLAMI en carácter de autor penalmente responsable (Art. 45 del Código Penal) del delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2007. Ello en atención a que, a luz de las modificaciones introducidas por la Ley 27.430, dicha conducta no encuadra en una figura legal. Así, mientras que la nueva redacción del Art. 1 de la citada norma, establece que el monto evadido debe exceder la suma de un millón quinientos mil de pesos (\$ 1.500.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, para tener por configurado el delito, la conducta endilgada en autos - según surge de la denuncia presentada por AFIP- se refiere a un perjuicio fiscal de pesos \$822.821,30, monto que se encuentra por debajo de la denominada condición objetiva de punibilidad. Por lo tanto, la conducta resulta atípica.

Extinción de la acción penal por prescripción

En lo que respecta a la prescripción de la acción penal, adelanto que comparto lo expresado por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que la misma ha operado respecto a la conducta de evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2006. En efecto, el último acto con virtualidad interruptiva del curso de la prescripción fue la citación a juicio dictada el 18 de diciembre de 2015. Con posterioridad, el imputado manifestó haberse acogido a un plan de regularización fiscal en el marco de la Ley N° 27.260. Sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse eficaz para interrumpir la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

prescripción, ya que las obligaciones incluidas en dicho plan no se correspondían con los hechos que se le imputan en esta causa. Esta circunstancia no pudo ser verificada en su debido momento debido a la presentación fragmentada e incompleta de la documentación por parte del imputado y su defensa, así como a la emisión de informes parciales por parte de ARCA, que omitieron precisar información o lo hicieron de forma ambigua.

En este contexto, el Tribunal, pese a los reiterados y continuos requerimientos efectuados al organismo recaudador, se vio objetivamente impedido de contar con un panorama claro que permitiera evaluar con precisión el alcance del acogimiento al régimen fiscal invocado, situación que recién pudo ser debidamente esclarecida en junio del presente año, cuando finalmente se reunió la totalidad de la información necesaria.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la escala penal prevista para el delito enrostrado establece un máximo de seis (6) años de prisión, resulta evidente que dicho plazo ha transcurrido a la fecha, sin que medien antecedentes posteriores con efecto interruptivo, conforme surge de los informes expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal incorporados a la causa.

En virtud de lo dispuesto por los artículos 59 inciso 3°, 62 inciso 2° y 67 cuarto párrafo —a contrario sensu— del Código Penal, y artículos 334, 335, 336 inciso 1° y 361 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde declarar extinta la acción penal en relación a evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2006 y, en consecuencia, dictar el sobreseimiento del imputado.

Por lo expuesto y de acuerdo al dictamen del señor Fiscal General que antecede;

RESUELVO:

1).- SOBRESEER a Néstor Alberto GIROLAMI, CUIT N° 20-12711013-2, del delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2007, en virtud de la modificación introducida por la Ley 27.430, aplicando el principio de ley más benigna con retroactividad (consagrado en el art. 2 del CP, art. 9 Pacto de San José de Costa Rica y art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); ello en los términos de los Arts. 335 y 336 inc. 3° del C.P.P.N.

2).- DECLARAR EXTINTA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, en orden al delito de evasión simple del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2006, todo en los términos de los Arts. 59 Inc. 3 y 62 Inc. 2 del CP., y en



consecuencia **SOBRESEER** a Néstor Alberto GIROLAMI, ya filiado, en orden al delito de evasión simple del Impuesto a las Ganancias, en carácter de autor penalmente responsable del mismo (Art. 45 del CP); ello en los términos de los Arts. 335 y 336 inc. 1° del CPPN.

3).- OFICIAR a los organismos pertinentes.

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.

Fecha de firma: 25/07/2025

Firmado por: MARIA NOEL COSTA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: PATRICIA CECILIA MOYANO, SECRETARIA



#27737172#464876585#20250725094404997